



# **Asamblea General Consejo de Seguridad**

Distr. general  
27 de enero de 2009  
Español  
Original: inglés

---

**Asamblea General**  
**Sexagésimo tercer período de sesiones**  
Temas 13 y 18 del programa

**Consejo de Seguridad**  
**Sexagésimo cuarto año**

**Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM  
y sus repercusiones en la paz, la seguridad y el desarrollo  
internacionales**

**La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán**

## **Carta de fecha 23 de enero de 2009 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas**

Tengo el honor de adjuntar a la presente el informe sobre las obligaciones jurídicas internacionales de Armenia en su condición de ocupante beligerante de territorios de Azerbaiyán (véase el anexo).

Agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con los temas del programa 13, “Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus repercusiones en la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales”, y 18, “La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán”, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Agshin **Mehdiyev**  
Embajador  
Representante Permanente



## **Anexo de la carta de fecha 23 de enero de 2009 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas**

### **Informe sobre las obligaciones jurídicas internacionales de Armenia en su condición de ocupante beligerante de territorios de Azerbaiyán**

1. En el presente informe, el Gobierno de la República de Azerbaiyán expone su posición con respecto a las obligaciones jurídicas internacionales de la República de Armenia (“Armenia”) en su condición de ocupante beligerante de territorios legítimos y reconocidos de la República de Azerbaiyán (“Azerbaiyán”)<sup>1</sup>. El informe trata de las cuestiones siguientes:

a) Conforme al derecho internacional, ¿es Armenia un ocupante de territorios de Azerbaiyán?

b) Si lo es, ¿cuáles son los deberes de Armenia en su condición de ocupante de territorios de Azerbaiyán con respecto a asuntos como el mantenimiento del orden público, la preservación del ordenamiento jurídico de Azerbaiyán y la protección de los derechos humanos en el territorio en cuestión?

c) ¿Cómo se puede hacer un seguimiento de las obligaciones de Armenia y exigir su cumplimiento con arreglo al derecho internacional?

#### **1. Generalidades**

2. Históricamente, el derecho internacional se ocupaba de la cuestión de la ocupación del territorio de un Estado como parte de lo que se solía denominar el derecho de la guerra y hoy se denomina derecho internacional humanitario<sup>2</sup>. Ese derecho se establece fundamentalmente en tres instrumentos, a saber: el Reglamento de la Cuarta Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 1907 (“el Reglamento de La Haya”), el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 1949 (“Cuarto Convenio de Ginebra”) y el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977 (“Protocolo adicional I”).

---

<sup>1</sup> Puede consultarse más información al respecto en los informes titulados “Ocupación militar de los territorios de Azerbaiyán: evaluación jurídica”, A/62/491-S/2007/615, “Las consecuencias jurídicas de la agresión armada por la República de Armenia contra la República de Azerbaiyán”, A/63/662-S/2008/812, y “El principio fundamental de la integridad territorial de los Estados y el derecho a la libre determinación en vista de las reivindicaciones revisionistas de Armenia”, A/63/664-S/2008/823.

<sup>2</sup> Véanse, por ejemplo, L. Green, *The Contemporary Law of Armed Conflict*, 2ª ed., Manchester, 2000, capítulos 12 y 15; H. P. Gasser, “Protection of the Civilian Population” en D. Fleck (ed.), *Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*, Oxford, 1995, pág. 209; Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, *The Manual of the Law of Armed Conflict*, Oxford, 2004, capítulos 9 y 11; E. Benvenisti, *The International Law of Occupation*, Princeton, 2004, y J. Pictet (ed.), *The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Geneva Convention IV*, Ginebra, 1958. Véase también A. Roberts, “What is a Military Occupation?”, 55 *British Year Book of International Law*, pág. 249.

3. Armenia pasó a ser parte en el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I el 7 de junio de 1993 y Azerbaiyán pasó a ser parte en el Cuarto Convenio el 1º de junio de 1993. En consecuencia, Armenia está obligada por los tres instrumentos indicados más arriba, puesto que el Reglamento de La Haya constituye un elemento del derecho internacional consuetudinario.

a) *Ocupación y soberanía*

4. Lo primero que cabe señalar es que el derecho internacional especifica que no se puede adquirir territorio mediante el uso de la fuerza. En el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas se declara que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado ...”.

5. En la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de 1970<sup>3</sup>, se disponía que:

“El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza.”

6. En el principio IV de la Declaración de principios aprobada por la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en el Acta Final de Helsinki, de 1975, se indicaba que:

“Los Estados participantes se abstendrán asimismo de hacer del territorio de cualquiera de ellos objeto de ocupación militar o de otras medidas de fuerza directas o indirectas que contravengan el derecho internacional, u objeto de adquisición mediante tales medidas o la amenaza de ellas. Ninguna de tales ocupación o adquisición se reconocerá como legal.”

7. Queda así meridianamente claro que la ocupación no confiere al Estado ocupante soberanía sobre el territorio ocupado. Gasser, por ejemplo, dice que la anexión de un territorio conquistado está prohibida por el derecho internacional, lo que significa forzosamente que si un Estado se apodera de partes del territorio de otro Estado mediante la fuerza o la amenaza de la fuerza, el derecho internacional debe considerar esa situación como temporal. Por consiguiente, el derecho internacional en materia de ocupación beligerante debe entenderse en el sentido de que la Potencia ocupante no es soberana, sino que ejerce un control provisional y temporal sobre el territorio extranjero<sup>4</sup>.

8. En consecuencia, la soberanía sobre el territorio ocupado no pasa al ocupante. El estatuto jurídico de la población no se puede conculcar mediante un acuerdo celebrado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante, ni mediante la anexión por parte de esta última<sup>5</sup>. La ocupación es por ello una relación

<sup>3</sup> Aprobada en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General.

<sup>4</sup> *Op. cit.*, pág. 242. Véase también Benvenisti, *op. cit.*, pág. 8. Obsérvense además *Prefecture of Voiotia v Germany (Distomo Massacre)*, Tribunal de Casación, Grecia, 4 de mayo de 2000, 129 *International Law Reports*, págs. 514 a 519, y *Mara'abe v The Prime Minister of Israel*, Tribunal Supremo de Israel, 15 de septiembre de 2005, 129 *International Law Reports*, págs. 241 a 252.

<sup>5</sup> Véase el artículo 47 del Cuarto Convenio de Ginebra.

de poder y ese poder se regula de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario, que establece los derechos y las obligaciones de la Potencia ocupante hasta que finalice esa condición. El estatuto jurídico de las partes en conflicto y del territorio de que se trate no se ven afectados por la ocupación de ese territorio<sup>6</sup>. En consecuencia, ninguna medida adoptada por Armenia ni por su autoridad local subordinada dentro de los territorios ocupados puede afectar al estatuto jurídico preexistente de esos territorios, que, por ello y con arreglo al derecho internacional, siguen perteneciendo a Azerbaiyán.

b) *Comienzo de la ocupación*

9. En el artículo 42 del Reglamento de La Haya se dispone que:

“Se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse.”

10. Esa disposición se considera una norma de derecho internacional consuetudinario y, por ello, vinculante para todos los Estados<sup>7</sup>. Fue examinada por la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, en la que la Corte declaró que:

“se considera ocupado un territorio cuando de hecho está bajo la autoridad del ejército enemigo, y la ocupación abarca sólo los territorios donde se ha establecido esa autoridad y en la medida en que se ejerza”<sup>8</sup>.

11. La Corte Internacional de Justicia observó que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario reflejado en el artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907, se considera que un territorio está ocupado cuando se encuentra de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo y la ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse. Para llegar a una conclusión sobre si un Estado cuyas fuerzas militares están presentes en el territorio de otro Estado como consecuencia de una intervención es una “Potencia ocupante” en el sentido en que se entienden esos términos en el *jus in bello*, la Corte ha de examinar si existen pruebas suficientes que demuestren que dicha autoridad estaba establecida de hecho y que el Estado que llevó a cabo la intervención ejercía esa autoridad en las zonas en cuestión<sup>9</sup>.

12. En el artículo 2 del Cuarto Convenio de Ginebra se dispone que el Convenio se aplicará:

“en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar”<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Véase el artículo 4 del Protocolo adicional I.

<sup>7</sup> Véase A/ES-10/273.

<sup>8</sup> Ibid., párr. 78.

<sup>9</sup> *Congo v Uganda*, ICJ Reports, 2005, págs. 168 a 230.

<sup>10</sup> Véase también el artículo 3 del Protocolo adicional I.

13. Puesto que tanto Armenia como Azerbaiyán son partes en ese Convenio, están obligadas por sus disposiciones. Por consiguiente, esa obligación se deriva de las dos partes citadas del artículo. En lo que se refiere al primer párrafo, en el comentario oficial sobre el Convenio se indica que cualquier controversia que surja entre dos Estados y conduzca a la intervención de los miembros de las fuerzas armadas es un conflicto armado en el sentido del artículo 2<sup>11</sup>. Que así ocurre desde principios del decenio de 1990 es indiscutible, al igual que el continuo estallido de hostilidades de baja intensidad y la pérdida de vidas<sup>12</sup>.

14. La Corte Internacional de Justicia analizó el significado de ese párrafo en su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado<sup>13</sup>. Señaló que el Convenio es aplicable de conformidad con ese párrafo cuando se dan dos condiciones: que exista un conflicto armado y que el conflicto haya surgido entre dos Partes Contratantes. La Corte afirmó también que “si se cumplen ambas condiciones, el Convenio se aplica, en particular, a cualquier territorio ocupado en el transcurso del conflicto por una de las Partes Contratantes”. Además, la Corte indicó que el objeto del segundo párrafo, en el que se dispone que el Convenio se aplicará “en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante”, era “simplemente dejar claro que, aunque la ocupación efectuada durante el conflicto no haya encontrado resistencia armada, el Convenio sigue siendo aplicable”. Como puso de relieve la Corte, el propósito del Convenio era tratar de proteger a las personas civiles, con independencia del estatuto del territorio ocupado<sup>14</sup>. Más adelante, subrayó ese punto de vista al llegar a la conclusión de que:

“el Cuarto Convenio de Ginebra es aplicable en cualquier territorio ocupado en caso de que surja un conflicto armado entre dos o varias Altas Partes Contratantes”<sup>15</sup>.

15. Además, la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía ha apuntado que las protecciones ofrecidas por el derecho internacional humanitario no han de ser puestas en duda porque los beligerantes mantengan una controversia en cuanto al estatuto del territorio. Respetar las protecciones internacionales en esas situaciones no prejuzga el estatuto del territorio<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Pictet (ed.), *Commentary, op. cit.*, pág. 20.

<sup>12</sup> Véase, por ejemplo, la información facultada por la agencia France-Presse el 5 de septiembre de 2007, según la cual tres soldados de Armenia y dos de Azerbaiyán habían resultado muertos en combates cerca de Nagorno-Karabaj. La agencia concluía señalando que “las fuerzas de Armenia y Azerbaiyán están desplegadas a los dos lados de una línea de cesación del fuego en Nagorno-Karabaj y zonas aledañas, a menudo muy cerca las unas de las otras, y los disparos son habituales”, <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/TBRL-76RMYP?OpenDocument>. Véase también el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la migración, los refugiados y la población de 6 de febrero de 2006, en el que se deploran “los incidentes frecuentes a lo largo de la línea de cesación del fuego y los incidentes fronterizos, que perjudican a los refugiados y desplazados”, doc. 10835, <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/EDOC10835.htm>, párr. 5. Esa terminología se repitió en la resolución 1497, 2006.

<sup>13</sup> A/ES-10/273, párr. 96.

<sup>14</sup> *Ibid.*, párr. 96.

<sup>15</sup> *Ibid.*, párr. 101.

<sup>16</sup> *Partial Award, Central Front, Ethiopia's Claim 2*, La Haya, 28 de abril de 2004, párr. 28. Véase también el artículo 4 del Protocolo adicional I.

16. Por lo que se refiere al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, son de aplicación el Reglamento de La Haya y el Cuarto Convenio de Ginebra. Además, puesto que Armenia es parte en el Protocolo adicional I, también le es de aplicación.

## **2. Armenia como ocupante con arreglo al derecho internacional**

### *a) Armenia como ocupante de territorios de Azerbaiyán*

17. El período decisivo para determinar la condición de Armenia como Potencia ocupante de territorios de Azerbaiyán es el final de 1991, puesto que fue durante ese el período cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y nacieron los nuevos Estados sucesores, transformándose así una controversia interna entre las dos Repúblicas de la Unión en un conflicto internacional. No puede existir ocupación en el sentido del concepto establecido en el derecho internacional entre fuerzas contendientes en un conflicto interno. Con la declaración de independencia de Armenia, el 21 de septiembre de 1991, y de Azerbaiyán, el 18 de octubre de ese año, el conflicto sobre Nagorno-Karabaj<sup>17</sup> se convirtió en un conflicto internacional. Armenia y Azerbaiyán se convirtieron en Estados independientes y fueron reconocidos como tales de acuerdo con el derecho internacional dentro de las fronteras que habían tenido como Repúblicas de la URSS, lo cual significa que internacionalmente se aceptó que Nagorno-Karabaj entraba dentro del territorio de Azerbaiyán.

18. Después de la independencia de Armenia y Azerbaiyán se intensificaron los combates en la región de Nagorno-Karabaj, con una participación cada vez mayor de las tropas de la República de Armenia durante ese período. El primer ataque armado de la República de Armenia contra la República de Azerbaiyán después de la independencia de las dos Repúblicas (un ataque en el que formaciones militares organizadas y vehículos blindados actuaron contra objetivos azerbaiyanos) ocurrió en febrero de 1992, cuando, como es tristemente notorio, se invadió la ciudad de Jodzhalí, en la República de Azerbaiyán<sup>18</sup>. En mayo de ese año se bombardeó directamente con artillería la ciudad azerbaiyana de Lachin desde el interior del territorio de la República de Armenia<sup>19</sup>. Los ataques de Armenia contra zonas enclavadas dentro de la República de Azerbaiyán se retomaron en 1993, lo que provocó cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad. En su exhaustivo informe de diciembre de 1994, Human Rights Watch, basándose en las pruebas que había reunido, demostró que “la participación en el conflicto era parte de las funciones asignadas al ejército de Armenia ...”. Human Rights Watch obtuvo esa información de prisioneros del ejército de Armenia capturados por Azerbaiyán y de soldados armenios en Ereván, la capital de Armenia. Varios periodistas occidentales también informaron haber visto autobuses cargados de soldados del ejército de Armenia que entraban en Nagorno-Karabaj desde Armenia. Human Rights Watch llegó a la

---

<sup>17</sup> Obsérvese que, en inglés, “Nagorny Karabakh” se escribe a veces “Nagorno-Karabakh” o “Karabagh”. En realidad, “Nagorny Karabakh” (“Nagorno-Karabaj” en español) es una traducción rusa del nombre original en azerí, (“Dağlıq Qarabağ”, pronunciado como “Daghlygh Garabagh”), que literalmente significa “Garabagh montañoso”. La palabra “Garabagh” en azerí significa “jardín negro”. Con objeto de evitar confusiones, se utilizará en lo sucesivo la forma “Nagorno-Karabaj”, de amplia difusión.

<sup>18</sup> Véase T. de Waal, *Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War* 170 (2003).

<sup>19</sup> Véase la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Azerbaiyán que figura como anexo de una carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Azerbaiyán (S/23926, 14 de mayo de 1992).

conclusión de que la intervención de tropas del ejército armenio en Azerbaiyán convertía a Armenia en parte en el conflicto y a la guerra en un conflicto armado internacional en el que participaban esos dos Estados<sup>20</sup>.

19. Que había y sigue habiendo una situación de confrontación armada ha sido reconocido por diversos órganos de las Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, se ha referido explícitamente, en relación con Azerbaiyán, a “la situación de conflicto armado con un país vecino”<sup>21</sup>. El 12 de abril de 2001, en sus observaciones sobre Azerbaiyán, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló que:

“Poco después de recuperar su independencia en 1991, el Estado parte entró en guerra con Armenia, otro Estado parte. Como resultado del conflicto, centenares de miles de personas de origen azerbaiyano y armenio se encuentran ahora desplazadas o refugiadas. Debido a la ocupación de aproximadamente un 20% de su territorio, el Estado parte no puede aplicar plenamente la Convención”<sup>22</sup>.

20. Además, ese Comité expresó “su preocupación por la persistencia del conflicto en Nagorno-Karabaj y en zonas aledañas de esa región de la República de Azerbaiyán”, un conflicto que “socava la paz y la seguridad en la región y obstaculiza la aplicación de la Convención”<sup>23</sup>. También se expresó preocupación por el “conflicto en la región Nagorno-Karabaj” el 14 de abril de 2005, en las observaciones finales del Comité sobre Azerbaiyán<sup>24</sup>.

21. Una posición similar ha adoptado el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 22 de diciembre de 1997, en sus observaciones finales sobre Azerbaiyán, indicó que “el Estado Parte también se enfrenta con una situación de considerable adversidad e inestabilidad debido a un conflicto armado con Armenia”<sup>25</sup>. El Comité se refirió asimismo al “conflicto con Armenia” el 14 de diciembre de 2004, en sus observaciones finales sobre Azerbaiyán<sup>26</sup>.

22. En el informe sobre las prácticas de derechos humanos en Armenia en 2006 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América se señaló, por ejemplo, que Armenia seguía ocupando el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj y siete territorios de Azerbaiyán aledaños, y todas las partes en el conflicto de Nagorno-Karabaj habían colocado minas terrestres a lo largo de la frontera, con Azerbaiyán, de 869 kilómetros y a lo largo de la línea de contacto<sup>27</sup>.

23. En el informe sobre las prácticas de derechos humanos en Azerbaiyán en 2006 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América se indicó que Armenia había seguido ocupando el territorio azerbaiyano de Nagorno-Karabaj y siete territorios de Azerbaiyán aledaños. Durante el año, incidentes

<sup>20</sup> *Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh*, Nueva York, 1994, págs. 69 a 73.

<sup>21</sup> Véanse las Observaciones del Comité de Derechos Humanos: Azerbaiyán, 3 de agosto de 1994, CCPR/C/79/Add.38, párr. 2. La referencia al “conflicto armado” se repitió el 12 de noviembre de 2001, en las observaciones finales del Comité sobre Azerbaiyán, CCPR/CO/73/AZE, párr. 3.

<sup>22</sup> CERD/C/304/Add.75, párr. 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, párr. 7.

<sup>24</sup> CERD/C/AZE/CO/4, párr. 10.

<sup>25</sup> E/C.12/1/Add.20, párr. 12.

<sup>26</sup> E/C.12/1/Add.104, párr. 11.

<sup>27</sup> <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78799.htm>.



producidos a lo largo de la línea militarizada de contacto que separaba a las partes como resultado del conflicto de Nagorno-Karabaj habían vuelto a provocar numerosos muertos y heridos en ambas partes. Según informaciones de fuentes no oficiales, se habían producido aproximadamente 20 muertos y 44 heridos, tomando en consideración las víctimas militares y civiles a ambos lados de la línea de contacto. El organismo nacional para las actuaciones relacionadas con las minas informó de que durante el año las minas terrestres habían causado la muerte a 2 personas y heridas a otras 15<sup>28</sup>.

24. Además, en el informe sobre Azerbaiyán de Freedom House correspondiente a 2006, se indica que el Gobierno de Azerbaiyán siguió sin tener control administrativo sobre la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj y las siete regiones aledañas (Kelbajar, Gubatli, Djabrail, Fizuli, Zengilan, Lachin y Agdam) que están ocupadas por Armenia. Esa zona constituye aproximadamente el 17% del territorio de Azerbaiyán<sup>29</sup>. Por su parte, en el resumen del informe sobre Nagorno-Karabaj de 11 de octubre de 2005 del International Crisis Group se señala que Armenia no está dispuesta a apoyar la retirada de los siete distritos ocupados en los alrededores de Nagorno-Karabaj ni a permitir el regreso de los desplazados internos azerbaiyanos a Nagorno-Karabaj hasta que la independencia de Nagorno-Karabaj sea una realidad<sup>30</sup>.

25. El Consejo de Seguridad ha reafirmado sistemáticamente la soberanía y la integridad territorial de Azerbaiyán y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para adquirir territorio. También ha reconocido sistemáticamente que Nagorno-Karabaj es parte de Azerbaiyán y ha exhortado en diversas ocasiones a las fuerzas ocupantes a retirarse de todos los territorios ocupados de Azerbaiyán.

26. En la resolución 822 (1993) del Consejo de Seguridad se instó a “la cesación inmediata de todas las hostilidades y actos hostiles con miras a establecer un cese del fuego duradero, así como el retiro inmediato de todas las fuerzas de ocupación del distrito de Kelbajar y de otras zonas recientemente ocupadas de Azerbaiyán”. En la resolución 853 (1993) se condenó “la toma del distrito de Agdam y de todas las demás zonas recientemente ocupadas de la República Azerbaiyana” y se exigió “la cesación inmediata de todas las hostilidades y la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas de ocupación del distrito de Agdam y de todas las demás zonas de la República Azerbaiyana recientemente ocupadas”, mientras que en la resolución 874 (1993) se instó de nuevo al “retiro de las fuerzas de ocupación de las zonas recientemente ocupadas”. En la resolución 884 (1993) se reafirmaron las resoluciones anteriores, se condenó la ocupación del distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz de la República Azerbaiyana y se exigió “el retiro unilateral de las fuerzas de ocupación del distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz y el retiro de las fuerzas de ocupación de todas las demás zonas recientemente ocupadas de la República Azerbaiyana”.

27. En las resoluciones 853 (1993) y 884 (1993) se instó además al Gobierno de la República de Armenia a que “siguiese ejerciendo su influencia” para lograr el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, al igual que se hizo

---

<sup>28</sup> <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78801.htm>.

<sup>29</sup> <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=47&nit=390&year=2006>.

<sup>30</sup> “Nagorno-Karabakh: A Plan for Peace”, informe No. 167, pág. I.



en la declaración formulada por la Presidenta del Consejo de Seguridad del 18 agosto de 1993<sup>31</sup>.

28. Desde 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas también ha incluido en su programa un tema titulado “La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán”. El 14 de marzo de 2008, la Asamblea aprobó la resolución 62/243, en cuya parte dispositiva figuraba lo siguiente:

“1. *Reafirma* que sigue respetando y apoyando la soberanía y la integridad territorial de la República de Azerbaiyán dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;

2. *Exige* la retirada inmediata, total e incondicional de todas las fuerzas armenias de todos los territorios ocupados de la República de Azerbaiyán;

3. *Reafirma* el derecho inalienable de la población expulsada de los territorios ocupados de la República de Azerbaiyán a regresar a sus hogares y hace hincapié en la necesidad de crear las condiciones adecuadas para su regreso, incluida la rehabilitación total de los territorios afectados por el conflicto;

5. *Reafirma* que ningún Estado reconocerá como lícita la situación creada por la ocupación de los territorios de la República de Azerbaiyán ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación.”

29. En el informe de la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 19 de noviembre de 2004, se declaró que en los enfrentamientos militares por la región de Nagorno-Karabaj, además de armenios de la localidad, participaron armenios de Armenia. En la actualidad hay soldados armenios acantonados en Nagorno-Karabaj y en zonas aledañas, las personas que se encuentran en la región tienen pasaportes armenios y el Gobierno de Armenia asigna a esta región recursos presupuestarios considerables<sup>32</sup>.

30. En la resolución 1416 (2005), aprobada el 25 de enero de 2005 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se observó en particular que partes importantes del territorio de Azerbaiyán seguían ocupadas por fuerzas de Armenia y se reiteró que la ocupación de territorio extranjero por un Estado miembro constituía una violación grave de las obligaciones de ese Estado como miembro del Consejo de Europa.

31. En su informe de septiembre de 2005, el International Crisis Group observó que, de acuerdo con una evaluación independiente, había 8.500 armenios de Karabaj en el ejército y 10.000 de Armenia, y que muchos reclutas y soldados contratados de Armenia siguen sirviendo en Nagorno-Karabaj, mientras que antiguos reclutas de Ereván y otras ciudades de Armenia habían comunicado al Crisis Group que, al parecer, estaban siendo enviados arbitrariamente a Nagorno-Karabaj y los distritos ocupados inmediatamente después de presentarse ante la oficina de reclutamiento, y negaban que se hubieran ofrecido jamás voluntarios para ir a Nagorno-Karabaj o al

<sup>31</sup> S/26326, 18 de agosto de 1993.

<sup>32</sup> David Atkinson, “The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the OSCE Minsk Conference”, Memorando explicativo, párr. 6.

territorio ocupado adyacente. Se señaló además que entre las fuerzas de Armenia y de Nagorno-Karabaj existían un alto nivel de integración<sup>33</sup>.

32. Los materiales indicativos anteriores demuestran claramente que las fuerzas armadas regulares de la República de Armenia participaron de modo directo en la toma de Nagorno-Karabaj y siete regiones aledañas. Además, Armenia ha sustentado la existencia de la “República de Nagorno-Karabaj”, una entidad creada de manera ilegal y totalmente no reconocida dentro del territorio internacionalmente reconocido de Azerbaiyán, por diversos medios políticos y económicos, entre ellos el mantenimiento de fuerzas militares en los territorios ocupados y en la línea de contacto.

33. Se ha reconocido a nivel internacional que los territorios de Azerbaiyán están bajo ocupación y que Armenia ha participado activamente en la creación y el mantenimiento de esa situación. En consecuencia, Armenia es una Potencia ocupante en el sentido de las disposiciones jurídicas internacionales pertinentes. En el artículo 6 del Cuarto Convenio de Ginebra se dispone que el Convenio se aplicará “desde el comienzo de todo conflicto u ocupación mencionados en el artículo 2”, de modo que claramente se aplica desde el momento en que entraron fuerzas de Armenia en territorio de Azerbaiyán y continuará aplicándose hasta su retirada definitiva<sup>34</sup>.

**a) Deberes de Armenia en su condición de ocupante de territorios de Azerbaiyán**

*1) En general*

34. En la declaración oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) formulada en 2005 por Thürer, se indicó, con respecto a los deberes de un ocupante a tenor del derecho aplicable, que la Potencia ocupante no debe ejercer su autoridad con objeto de promover sus propios intereses, ni para satisfacer los intereses de su propia población. En ningún caso podrá explotar a los habitantes, los recursos ni otros activos del territorio bajo su control en beneficio de su propio territorio o población. Toda ocupación militar se considera de naturaleza temporal; la soberanía no pasa al ocupante y por ello las Potencias ocupantes han de mantener el statu quo. Así pues, deben respetar el derecho y las instituciones existentes y sólo introducir modificaciones cuando sean necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho en materia de ocupación, mantener el orden y la vida públicos, garantizar la administración normal y mantener su propia seguridad<sup>35</sup>.

35. El artículo 43 del Reglamento de La Haya constituye el marco fundamental del derecho en materia de ocupación. En él se indica que:

“Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de

---

<sup>33</sup> “Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground”, Informe No. 166, 14 de septiembre de 2005, págs. 9 y 10.

<sup>34</sup> Véase Pictet, *Geneva Convention IV*, pág. 60, con quien concuerda la declaración oficial del Comité Internacional de la Cruz Roja formulada el 21 de octubre de 2005 por D. Thürer, <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/occupation-statement-211105?opendocument>. Véanse también Roberts, “Military Occupation”, loc. cit., pág. 256 y la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, A/ES-10/273, donde se hace notar que el Cuarto Convenio de Ginebra se aplica cuando existe un conflicto armado entre dos partes contratantes.

<sup>35</sup> <http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/occupation-statement-211105?opendocument>.

restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país.”

36. Además, la Corte Internacional de Justicia ha puesto de relieve que, en virtud del artículo 43, una Potencia ocupante está obligada a adoptar todas las medidas que estén a su alcance con objeto de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos en la zona ocupada respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en la zona ocupada. Esa obligación incluye el deber de asegurar el respeto de las reglas aplicables de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, proteger a los habitantes del territorio ocupado contra actos de violencia y no tolerar que ningún tercero ejerza esa violencia<sup>36</sup>.

37. El artículo 43 ha sido descrito como “la esencia” del derecho en materia de ocupación y la culminación de los intentos normativos llevados a cabo en el siglo XIX y, por ende, se ha reconocido que expresaba el derecho internacional consuetudinario<sup>37</sup>. Interpretados conjuntamente, los elementos principales de esa disposición crean una presunción convincente en contra de las modificaciones por lo que se refiere a la relación de la Potencia ocupante con el territorio ocupado y su población, en particular con respecto al mantenimiento del ordenamiento jurídico en vigor, si bien se permite al ocupante “restablecer y conservar” el orden y la vida públicos. Aunque el equilibrio entre ambos no siempre está claro, especialmente por lo que se refiere a las ocupaciones prolongadas, sí está claro que la Potencia ocupante no tiene carta blanca para alterar la estructura jurídica y social del territorio de que se trate y que está prohibida cualquier forma de “anexión progresiva”. Como ha apuntado Benvenisti, la administración del territorio ocupado ha de proteger dos conjuntos de intereses: en primer lugar, ha de preservar los derechos soberanos del gobierno derrocado y, en segundo lugar, ha de proteger a la población local contra la explotación de sus personas y sus bienes por parte del ocupante<sup>38</sup>.

## 2) *Protección del ordenamiento jurídico local en vigor*

38. El derecho internacional humanitario dispone que durante la ocupación se mantenga el ordenamiento jurídico local, lo cual constituye un elemento fundamental de la protección jurídica del territorio y la población cuando caen bajo la ocupación de una Potencia enemiga. En el artículo 43 del Reglamento de La Haya así se dispone expresamente al indicarse que la Potencia ocupante debe respetar las leyes vigentes en el país, “salvo impedimento absoluto”, un umbral elevado que sólo se alcanzará en escasas ocasiones. Ello es así porque la ocupación es una situación de hecho temporal con una modificación mínima de la estructura jurídica básica por lo que se refiere al territorio en cuestión. La expresión “leyes vigentes” se ha de interpretar en sentido amplio con objeto de incluir no sólo las leyes en sentido

<sup>36</sup> *Congo v Uganda*, ICJ Reports, 2005, págs. 168 a 231.

<sup>37</sup> Véase Benvenisti, op. cit., págs. 7 y 8. Véanse también M. Sassòli, “Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers”, *16 European Journal of International Law*, 2005, pág. 661, y A. Roberts, “Transformative Military Occupation”, *100 American Journal of International Law*, 2006, pág. 580.

<sup>38</sup> *Op. cit.*, pág. 28. Véase también S. Wills, “Occupation Law and Multi-National Operations: Problems and Perspectives”, *77 British Year Book of International Law*, págs. 256 a 264.

estricto, sino también disposiciones constitucionales, decretos, órdenes, precedentes jurisprudenciales y también reglamentos administrativos y decretos-leyes<sup>39</sup>.

39. El artículo 43 del Reglamento de La Haya fue complementado con el Cuarto Convenio de Ginebra. En el artículo 64, por ejemplo, se dispone que permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo si es una amenaza para la seguridad de la Potencia ocupante. Sin embargo, en virtud del segundo párrafo de esa disposición, las Potencias ocupantes podrán imponer a la población del territorio ocupado “las disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente Convenio y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la Potencia ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice”. Sin embargo, esto se ha de interpretar restrictivamente y la diferencia entre preservar las leyes locales y establecer “disposiciones” que sean “indispensables” está clara y es importante. Significa no sólo que el ordenamiento jurídico en sí únicamente resulta afectado por las medidas nuevas que no se definen como leyes, sino que el criterio para determinar la legitimidad de esas medidas impuestas es que sean “indispensables” a los efectos indicados. El hecho de que en francés se utilice el término “indispensable” demuestra claramente la naturaleza restrictiva de la reserva.

40. En el artículo 64 se dispone también que “los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones previstas en tal legislación”, mientras que en el artículo 54 se dispone que:

“está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o de discriminación por abstenerse de desempeñar sus funciones basándose en consideraciones de conciencia.”

41. En otras palabras, aunque la Potencia ocupante puede promulgar sus propias disposiciones penales con objeto de mantener el orden administrativo, esa competencia está limitada por la necesidad de preservar el ordenamiento jurídico local en vigor y respetar el estado de derecho<sup>40</sup>. Además, las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo<sup>41</sup>. Los representantes de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) están autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya personas protegidas, especialmente a los lugares de internamiento, de detención y de trabajo<sup>42</sup>.

42. Además de preservar el ordenamiento jurídico local, en el artículo 56 se dispone que en toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de

---

<sup>39</sup> Véase Sassòli, *loc. cit.*, págs. 668 y 669.

<sup>40</sup> Véanse los artículos 67 y 69 a 75 del Cuarto Convenio de Ginebra y el artículo 75 del Protocolo adicional I.

<sup>41</sup> Artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra.

<sup>42</sup> Artículo 143.

enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión<sup>43</sup>.

3) *Derechos de propiedad*

43. En el artículo 46 del Reglamento de La Haya se dispone, entre otras cosas, que la vida de los individuos y la propiedad privada, así como las creencias religiosas y la práctica de los cultos, deben ser respetados. En él también se especifica que la propiedad privada no puede ser confiscada, salvo cuando sea requisada con fines militares necesarios, pero incluso en ese caso se habrán de tener en cuenta las necesidades de la población civil<sup>44</sup>. Está prohibido el pillaje<sup>45</sup> y también están prohibidas las medidas de represalia contra los bienes de las personas protegidas<sup>46</sup>.

44. En el artículo 55 se indica que el Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas que pertenezcan al Estado enemigo y se encuentren en el país ocupado y que deberá defender el capital de esas empresas y administrarlas conforme a las reglas del usufructo. Además, en el artículo 56 se dispone que los bienes de las comunidades, los de establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, serán tratados como propiedad privada y se prohíbe y debe perseguirse toda ocupación, destrucción o deterioro intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas.

45. En el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra se prohíbe que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas<sup>47</sup>. Constituye una infracción grave del Convenio la destrucción no justificada a gran escala<sup>48</sup>.

4) *Protección de las personas protegidas*

46. Existen diversas disposiciones en las que se detalla el trato que se ha de dispensar a las personas que estén dentro del territorio ocupado (denominadas “personas protegidas” en el Convenio). Las principales son las siguientes:

- i) Está prohibido emplear a las personas protegidas para trabajar fuera del territorio ocupado (artículo 51, párr. 3);
- ii) Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Todas las personas protegidas serán tratadas por la parte en conflicto en cuyo poder

<sup>43</sup> Véase también el artículo 14 del Protocolo adicional I.

<sup>44</sup> Artículo 52 del Reglamento de La Haya y artículo 55 del Cuarto Convenio de Ginebra.

<sup>45</sup> Artículo 47 del Reglamento de La Haya.

<sup>46</sup> Artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra.

<sup>47</sup> Véase también el apartado g) del artículo 23 del Reglamento de La Haya.

<sup>48</sup> Artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra.

estén con las mismas consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas (artículo 27).

iii) La parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es responsable del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que se pueda incurrir (artículo 29).

iv) No podrá ejercerse coacción alguna de índole física o moral contra las personas protegidas, en especial para obtener de ellas, o de terceros, informaciones (artículo 31).

v) Está prohibido emplear toda medida que pueda causar sufrimientos físicos o la exterminación de las personas protegidas que estén en su poder. Esta prohibición se aplica no solamente al homicidio, a la tortura, a los castigos corporales, a las mutilaciones y a los experimentos médicos o científicos no requeridos por el tratamiento médico de una persona protegida, sino también a cualesquiera otros malos tratos por parte de agentes civiles o militares (artículo 32).

vi) No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo y las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes (artículo 33).

vii) Está prohibida la toma de rehenes (artículo 34).

#### 5) *Desaparecidos*

47. Se aplican disposiciones especiales con respecto a los desaparecidos. En el artículo 26 del Cuarto Convenio de Ginebra se dispone que cada parte en conflicto facilitará la búsqueda emprendida por los miembros de familias dispersadas a causa de la guerra para reanudar los contactos entre unos y otros, y para reunirlos, si es posible. Facilitará, en especial, la acción de los organismos dedicados a esa tarea, a condición de que los haya aceptado y que apliquen las medidas de seguridad por ella tomadas.

48. En el artículo 33 del Protocolo adicional I, que se titula específicamente “Desaparecidos” se dispone que:

“1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate.

2. Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se benefician de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo:

a) Registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del Cuarto Convenio la información sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante más

de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación o hubieran fallecido durante un período de detención;

b) En toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación.

3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad con el párrafo I, y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia.

4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas de campo de batalla; esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompañados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones.”

49. Puesto que es parte en el Protocolo adicional I, Armenia está obligada por la disposición citada *supra*.

50. Además, en la resolución 59/189, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2004, se exhortó a los Estados que sean partes en un conflicto armado a que adopten todas las medidas apropiadas para impedir la desaparición de personas en relación con ese conflicto y para determinar el paradero de las personas dadas por desaparecidas a raíz de esa situación. En la resolución también se reafirmó el derecho de las familias a conocer la suerte de sus miembros dados por desaparecidos en relación con conflictos armados; y que cada una de las partes en un conflicto armado, tan pronto lo permitan las circunstancias y, a más tardar, una vez concluidas las hostilidades, habrá de buscar a las personas declaradas desaparecidas por una parte adversa. Se exhortó a los Estados que sean partes en un conflicto armado a que adopten oportunamente todas las medidas necesarias para determinar la identidad y la suerte de las personas dadas por desaparecidas en relación con ese conflicto<sup>49</sup>.

51. En la resolución 1553 (2007) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se puso de relieve que la cuestión de los desaparecidos era un problema humanitario con repercusiones en la esfera de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y que el tiempo era fundamental cuando se trataba de resolver el problema de los desaparecidos. En la resolución se señaló que a la Asamblea Parlamentaria le preocupaban las continuas denuncias de detención secreta de desaparecidos. En ella también se cifraba en 4.499 los azerbaiyanos

---

<sup>49</sup> Véanse también las resoluciones de la Asamblea General 61/155, aprobada el 19 de diciembre de 2006, y 63/183, aprobada el 18 de diciembre de 2008.



considerados desaparecidos como consecuencia del conflicto de Nagorno-Karabaj<sup>50</sup> y se declaraba que el derecho a conocer la suerte de los familiares desaparecidos está firmemente afianzado en el derecho internacional humanitario. Además, la práctica estatal establece como norma del derecho internacional consuetudinario, aplicable tanto en los conflictos internacionales como en los no internacionales, la obligación de cada parte en el conflicto armado de adoptar todas las medidas que sean viables para determinar el paradero de las personas dadas por desaparecidas como resultado del conflicto armado, y de proporcionar a los familiares cualquier información que obre en su poder sobre la suerte que hayan corrido. El derecho de saber también está enraizado en los derechos protegidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular los artículos 2, 3, 5, 8, 10 y 13.

6) *Prohibición del establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados*

52. En el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra se dispone que “la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”, lo cual constituye la base y la expresión de una norma jurídica que prohíbe el establecimiento de asentamientos en los territorios ocupados constituidos por población de la Potencia ocupante o por personas a las que la Potencia ocupante haya alentado con la intención, explícita o no, de alterar el equilibrio demográfico. La Corte Internacional de Justicia ha señalado que esa disposición:

“prohíbe no sólo las deportaciones o los traslados forzosos de población, como los realizados durante la segunda guerra mundial, sino también todas las medidas adoptadas por una Potencia ocupante con el fin de organizar o fomentar traslados de partes de su propia población al territorio ocupado”<sup>51</sup>.

53. Esa actividad también constituye una infracción grave del Protocolo adicional I<sup>52</sup> e incluso una infracción de la propia legislación interna de Armenia<sup>53</sup>. Los intentos de cambiar la composición demográfica de territorios ocupados también han sido condenados por el Consejo de Seguridad<sup>54</sup>. En su Decisión 2 (47) sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, de 17 de agosto de 1995, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial declaró que “todo intento de modificar o apoyar la modificación de la composición demográfica de una zona, en contra de la voluntad de sus habitantes originales y por cualquier medio que se produzca, constituye una violación del derecho internacional”<sup>55</sup>, mientras que en su informe

---

<sup>50</sup> Según la Comisión Estatal de la República de Azerbaiyán para los Prisioneros de Guerra, los Rehenes y los Desaparecidos, al 1º de enero de 2008, 4.210 ciudadanos de Azerbaiyán habían sido declarados desaparecidos en conexión con el conflicto, de los cuales 47 eran niños, 256 mujeres y 355 ancianos.

<sup>51</sup> A/ES-10/273, párr. 120.

<sup>52</sup> Véase el apartado a) del párrafo 4 del artículo 85, en el cual se define como infracción grave del Protocolo “el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la población de ese territorio, en violación del artículo 49 del Cuarto Convenio”. Constituye también un crimen de guerra con arreglo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 1998; véase el inciso viii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo 8.

<sup>53</sup> Véase J. M. Henckaerts y L. Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, vol I: *Rules*, CICR, Cambridge, 2005, pág. 462, nota de pie de página 36.

<sup>54</sup> Véanse, por ejemplo, las resoluciones 446, 452, 465, 476 y 677.

<sup>55</sup> A/50/18, 1995, párr. 26.

final sobre “Los derechos humanos y el traslado de poblaciones”, presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el Relator Especial Al-Khasawneh subrayó la ilegalidad de los traslados de población y su prohibición con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario<sup>56</sup>. La Subcomisión hizo suya esa opinión en su examen del informe<sup>57</sup>.

54. La práctica demuestra claramente que Armenia ha infringido esa prohibición. Se ha animado a un número notable de colonos de Armenia a trasladarse a las zonas ocupadas, en particular a la zona de Lachin, que había sido especialmente despoblada de sus habitantes azerbaiyanos. Numerosas fuentes independientes han dado noticia de la introducción de colonos en las zonas ocupadas.

55. En el informe de la misión de investigación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a los territorios ocupados de Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj de 2005 se llegó a la conclusión de que las cifras de los asentamientos eran aproximadamente las siguientes: distrito de Kelbajar, unas 1.500 personas; distrito de Agdam, de 800 a 1.000 personas; distrito de Fizuli, menos de 10 personas; distrito de Jebrail, menos de 100 personas; distrito de Zangelan, de 700 a 1.000 personas; y distrito de Kubatly, de 1.000 a 1.500 personas<sup>58</sup>. En el informe también se hizo notar que vivían en el pueblo de Lachin alrededor de 3.000 personas asentadas<sup>59</sup> y se puso de relieve que “los incentivos para el asentamiento eran evidentes”<sup>60</sup>. En la parte del estudio de 2002 sobre los refugiados en el mundo dedicada a Armenia, el Comité de los Estados Unidos para los refugiados y los inmigrantes indicó que según el Gobierno de facto de Nagorno-Karabaj, en 2001 la población del enclave ascendía a unos 143.000 habitantes, cifra ligeramente superior a la de la población de origen armenio existente en la región en 1988, antes del conflicto. Según funcionarios gubernamentales de Armenia, unas 1.000 familias de colonos procedentes de Armenia residían en Nagorno-Karabaj y en el corredor de Lachin, una franja de tierra que separa a Nagorno-Karabaj de Armenia. Según el Gobierno, 875 refugiados de origen armenio regresaron a Nagorno-Karabaj en 2001. La mayoría de los colonos de origen armenio de Nagorno-Karabaj, aunque no todos ellos, son antiguos refugiados de Azerbaiyán. Los colonos que deciden residir en Nagorno-Karabaj y las zonas aledañas al parecer reciben de las autoridades de hecho el equivalente de 365 dólares de los EE. UU. y una vivienda<sup>61</sup>.

56. En un documento preparado por Anna Matveeva sobre las minorías en el Cáucaso meridional para el noveno período de sesiones (mayo de 2003) del Grupo de Trabajo sobre las Minorías de la Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se afirmó que desde el decenio de 1990 se había venido practicando una política de reasentamiento en zonas aledañas de Karabaj en poder de las fuerzas armenias (“territorios ocupados” o

<sup>56</sup> E/CN.4/Sub.2/1997/23, 27 de junio de 1997. Véase también el primer informe de Al-Khasawneh y Hatano, E/CN.4/Sub.2/1993/17 y Corr.1, 1993.

<sup>57</sup> Resolución 1997/29 de la Subcomisión.

<sup>58</sup> A/59/747-S/2005/187, pág. 31.

<sup>59</sup> *Ibid.*, pág. 35.

<sup>60</sup> *Ibid.*, pág. 36.

<sup>61</sup> [http://refugees.org/countryreports.aspx?\\_\\_VIEWSTATE=dDwxMTA1OTA4MTYwOztsPENvdW50cnlERDpHb0JldHRvbjs%2BPrImhOOqDI29eBMz8b04PTi8xjW2&cid=312&subm=&ssm=&map=&\\_ctl0%3ASearchInput=+KEYWORD+SEARCH&CountryDD%3ALocationList](http://refugees.org/countryreports.aspx?__VIEWSTATE=dDwxMTA1OTA4MTYwOztsPENvdW50cnlERDpHb0JldHRvbjs%2BPrImhOOqDI29eBMz8b04PTi8xjW2&cid=312&subm=&ssm=&map=&_ctl0%3ASearchInput=+KEYWORD+SEARCH&CountryDD%3ALocationList).

“zona de seguridad”) que gozaban de una relativa seguridad. Las solicitudes de asentamiento eran aprobadas por el Gobernador de Lachin que solía aceptar principalmente a familias. Los colonos recibían normalmente ayuda del Estado para renovar las casas, no pagaban impuestos y abonaban tarifas muy reducidas por los servicios públicos, mientras que las autoridades trataban de constituir una infraestructura física y social<sup>62</sup>.

57. En el informe del International Crisis Group correspondiente a septiembre de 2005 se indicó que Stepanakert<sup>63</sup> consideraba Lachin a todos los efectos parte de Nagorno-Karabaj. Su estructura demográfica había sido modificada. Antes de la guerra, vivían allí 47.400 azerbaiyanos y kurdos; en 2005 su población estaba compuesta por unos 10.000 armenios, según los funcionarios de Nagorno-Karabaj. Entre los incentivos ofrecidos a los colonos figuraban los siguientes: vivienda gratuita, infraestructura social, servicios públicos económicos o gratuitos, impuestos reducidos, dinero y ganado. En el centro de la ciudad se había reconstruido y redistribuido hasta el 85% de las casas. Tendidos eléctricos, conexiones por carretera y otras infraestructuras de nueva creación habían hecho que el distrito dependiera más de Armenia y Nagorno-Karabaj que antes de la guerra<sup>64</sup>.

58. En el informe del International Crisis Group correspondiente a octubre de 2005 se señaló que el interés por Lachin parecía basarse en algo más que la seguridad. Stepanakert, con el apoyo de Armenia, había modificado la estructura demográfica del distrito, lo cual complicaba cualquier traspaso. Stepanakert consideraba Lachin a todos los efectos parte de Nagorno-Karabaj y había establecido infraestructuras e instituciones que violaban claramente las prohibiciones del derecho internacional sobre el asentamiento en territorios ocupados<sup>65</sup>.

59. En consecuencia, ha quedado claramente demostrado que Armenia ha violado esa importante norma del derecho internacional humanitario.

7) *Aplicación a las administraciones locales subordinadas*

60. En el Cuarto Convenio de Ginebra se dispone que los derechos y deberes derivados del Convenio continuarán existiendo con independencia de la voluntad de la Potencia ocupante. En particular, en el artículo 47 se dispone lo siguiente:

“No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la ocupación en las instituciones o en el Gobierno del territorio de que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del territorio ocupado.”

---

<sup>62</sup> E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.7, 5 de mayo de 2003, págs. 34 y 35.

<sup>63</sup> Obsérvese que el nombre de la ciudad era Jankendi hasta septiembre de 1923, cuando fue sustituido por el nombre del dirigente bolchevique Stepan Shaumian. Aunque las autoridades de Azerbaiyán restablecieron posteriormente el nombre original de la ciudad, los armenios aún se siguen refiriendo a ella como “Stepanakert”.

<sup>64</sup> *Op. cit.*, pág. 7.

<sup>65</sup> *Op. cit.*, pág. 22. Véase también el análisis completo del programa de asentamiento presentado en noviembre de 2004 por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas, A/59/568.

61. En particular, no se pueden eludir los derechos que establece el derecho internacional humanitario recurriendo a la excusa de que otra parte está ejerciendo elementos del poder dentro del marco de la ocupación. Esa es la situación a que se refiere Roberts al observar que las Potencias ocupantes a menudo tratan de disfrazar o limitar su propia función actuando indirectamente, por ejemplo, estableciendo algún tipo de régimen títere cuasi independiente<sup>66</sup>. Está claro, sin embargo, que una Potencia ocupante no puede inhibirse de su responsabilidad creando una administración local subordinada ni manteniendo su existencia de otro modo. En el manual sobre el derecho de los conflictos armados, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por ejemplo, se indica que la Potencia ocupante no puede sortear sus responsabilidades instalando un gobierno títere ni emitiendo órdenes que se ejecuten por conducto de funcionarios de la administración local que siga actuando en el territorio<sup>67</sup>.

62. Por consiguiente, en su condición de Potencia ocupante, Armenia es responsable no sólo de la actuación de sus propias fuerzas armadas y los demás órganos y agentes de su administración, sino también de la actuación de su administración local subordinada en los territorios ocupados, en particular las fuerzas y los funcionarios de la denominada “República de Nagorno-Karabaj”.

### 3. Aplicación de las normas internacionales de derechos humanos a las ocupaciones

63. Además de las reglas tradicionales del derecho humanitario, las normas internacionales de derechos humanos se consideran ahora aplicables en principio a las situaciones de ocupación. La Corte Internacional de Justicia ha interpretado el artículo 43 del Reglamento de La Haya de modo que incluye el deber de asegurar el respeto de las reglas aplicables de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, proteger a los habitantes del territorio ocupado contra actos de violencia y no tolerar que ningún tercero ejerza esa violencia<sup>68</sup>.

64. En términos más generales, la Corte Internacional de Justicia ha analizado la relación entre el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. En su opinión consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, la Corte puso de relieve que “la protección prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no cesa en tiempos de guerra, excepto cuando se aplica el artículo 4 del Pacto, según el cual algunas disposiciones pueden ser suspendidas cuando se da una situación de emergencia nacional”; en esos casos habrá de determinar la cuestión la *lex specialis* aplicable, es decir, el derecho internacional humanitario<sup>69</sup>.

65. La Corte volvió sobre esa cuestión en su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, en la que declaró más generalmente que:

---

<sup>66</sup> “Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights”, 100 *American Journal of International Law*, 2006, págs. 580 a 586.

<sup>67</sup> *Op. cit.*, pág. 282.

<sup>68</sup> *Congo v Uganda*, ICJ Reports, 2005, págs. 168 a 231 y 242 y siguientes.

<sup>69</sup> ICJ Reports, 1996, págs. 226 a 239.

“la protección que ofrecen los convenios y convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado, salvo en caso de que se apliquen disposiciones de suspensión como las que figuran en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”<sup>70</sup>

66. En cuanto a la relación entre el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, la Corte observó que había tres situaciones posibles. En primer lugar, algunos derechos podían corresponder exclusivamente al derecho humanitario, otros podían corresponder exclusivamente a las normas de derechos humanos y algunas cuestiones podían corresponder a ambas ramas del derecho internacional<sup>71</sup>. Se trataba fundamentalmente de una cuestión de interpretación de cada instrumento en cuestión. En particular, la jurisdicción de los Estados, aunque fundamentalmente es territorial, a veces se puede ejercer fuera del territorio nacional y en esa situación los Estados partes habían de aplicar el Pacto Internacional y otros tratados pertinentes de derechos humanos. Esa concepción se consideraba coherente con los *travaux préparatoires*, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la práctica constante del Comité de Derechos Humanos establecido en virtud de él<sup>72</sup>.

67. La Corte concluyó afirmando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño eran “aplicables con respecto a los actos de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio”<sup>73</sup>.

68. Cabe señalar también la aplicabilidad del principio general de la responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos, lo cual obviamente incluiría a los miembros de sus fuerzas armadas cuando actúan en el extranjero<sup>74</sup>. No deja de ser interesante que, en la causa relativa a las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, la Corte se refiriera además a la cuestión de la ocupación prolongada y a la aplicabilidad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>75</sup>.

69. La Corte volvió sobre la cuestión de la relación entre el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos reafirmando que los instrumentos internacionales de derechos humanos son aplicables “con respecto a los actos de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su propio territorio”, en particular en territorios ocupados<sup>76</sup>.

70. En consecuencia, hoy se acepta que el derecho aplicable en situaciones de ocupación incluye los instrumentos multilaterales de derechos humanos en los que sea parte la Potencia ocupante, lo cual significa forzosamente no sólo que los órganos y agentes de la Potencia ocupante deben actuar de conformidad con las

---

<sup>70</sup> A/ES-10/273, párr. 106.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid., págs. 40 y 41.

<sup>73</sup> Ibid., pág. 41.

<sup>74</sup> Véanse, por ejemplo, *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur*, ICJ Reports, 1999, pág. 87 y *Congo v Uganda*, ICJ Reports, 2005, págs. 168 a 242. Véanse también el artículo 4 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, 2001, A/56/10 y la resolución 56/83 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 2001.

<sup>75</sup> A/ES-10/273.

<sup>76</sup> ICJ Reports, 2005, págs. 178 a 243.

disposiciones de esos instrumentos, sino también que la población tiene derecho a beneficiarse de su aplicación. De ese modo, la aplicación en tales situaciones de las normas de derechos humanos repercute sobre las facultades y las obligaciones del ocupante y afecta a los intentos tradicionales por equilibrar la necesidad militar y la humanidad en cualquier ocupación.

71. Armenia es parte en los siguientes tratados universales de derechos humanos desde la fecha que figura entre paréntesis:

- i) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (23 de junio de 1993);
- ii) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (13 de septiembre de 1993);
- iii) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (23 de junio de 1993);
- iv) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (23 de junio de 1993);
- v) Convención sobre los Derechos del Niño (23 de junio de 1993);
- vi) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (13 de septiembre de 1993);
- vii) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (13 de septiembre de 1993)<sup>77</sup>.

72. En consecuencia, Armenia está obligada por las disposiciones de esos tratados no sólo dentro de sus propias fronteras, sino también en los territorios ocupados de Azerbaiyán. Cabe señalar brevemente como ejemplo la pertinencia de las obligaciones siguientes:

- i) La obligación de respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en cada instrumento, sin distinción alguna de ningún tipo (artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales);
- ii) El derecho a la vida (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- iii) La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes);
- iv) El derecho a la libertad y a la seguridad personales (artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- v) El derecho a circular libremente y el derecho a no ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);

---

<sup>77</sup> Armenia también es parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 2006 (10 de abril de 2007). Esa Convención aún no ha entrado en vigor.

- vi) El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y a la igualdad de protección de la ley (artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- vii) La prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia (artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- viii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
- ix) La prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (artículo 20);
- x) Los derechos de reunión pacífica y de asociación (artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- xi) El derecho y la oportunidad, sin distinciones ni restricciones indebidas, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos);
- xii) El derecho de las personas que pertenezcan a minorías a que no se les niegue el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma (artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

73. Además, Armenia es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La cuestión de la aplicación de ese Convenio extraterritorialmente por los Estados partes ha sido objeto de diversas causas importantes.

74. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado la noción de “jurisdicción” que aparece en el artículo 1 (“Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Título I del presente Convenio”) en el sentido de que incluye aquella situación en que los actos de las autoridades de los Estados contratantes, con independencia de que se ejecuten dentro o fuera de las fronteras nacionales, producen efectos fuera de su propio territorio<sup>78</sup>. El Tribunal puso de relieve que teniendo en cuenta el objeto y propósito del Convenio, la responsabilidad de una parte contratante también puede originarse cuando, como consecuencia de una intervención militar, ya sea legítima o ilegítima, ejerza un control efectivo sobre una zona que se encuentre fuera de su territorio nacional. La obligación de garantizar, en esa zona, los derechos y libertades enunciados en el Convenio se deriva del hecho de ese control, ya se ejerza directamente, por conducto de sus fuerzas armadas, o por conducto de una administración local subordinada<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Véase, por ejemplo, *Drozd and Janousek v France and Spain*, Serie A, vol. 240, 1992, pág. 29. Véanse también *Loizidou v Turkey*, fallos de 23 de febrero de 1995 y 28 de noviembre de 1996, *Cyprus v Turkey*, fallo de 10 de mayo de 2001, *Ilaşcu v Moldova and Russia*, fallo de 8 de julio de 2004.

<sup>79</sup> Fallo de 23 de febrero de 1995, párr. 62. Véanse también el fallo de 28 de noviembre de 1996, párr. 52 y el fallo de 10 de mayo de 2001, párrs. 75 y siguientes.



75. El Tribunal aclaró además que la responsabilidad de un Estado por el ejercicio del control efectivo sobre la zona fuera de su territorio nacional no se puede limitar a los actos de sus propios soldados o funcionarios en esa zona, sino que también ha de originarse en virtud de los actos de la administración local que sobrevive gracias al apoyo militar o de otra naturaleza de ese Estado<sup>80</sup>. Esa responsabilidad incluiría los actos de un Estado en apoyo de la instalación de un Estado separatista dentro del territorio de otro Estado<sup>81</sup>. La responsabilidad también se podría originar por la aquiescencia o la connivencia de las autoridades de un Estado contratante a los actos de particulares que infrinjan los derechos contemplados en el Convenio de otras personas dentro de su jurisdicción, en particular con respecto al reconocimiento por un Estado de los actos de “las autoridades autoproclamadas que no reconoce la comunidad internacional”<sup>82</sup>.

76. Así pues, las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos cometidas por Armenia en los territorios ocupados de Azerbaiyán han hecho que ese país incurra en responsabilidad. Entre los derechos pertinentes en virtud de ese Convenio estarían el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 3), el respeto de las garantías procesales (artículo 5), el derecho a un proceso equitativo (artículo 6), el derecho a la vida privada y familiar (artículo 8) y el derecho al goce pacífico de la propiedad (artículo 1 del Protocolo I).

#### **4. Cumplimiento de las obligaciones de Armenia en virtud del derecho internacional aplicable**

77. En la medida en que Armenia ha infringido el derecho aplicable en relación con la ocupación de territorios de Azerbaiyán, es responsable con arreglo al derecho internacional. Ese es el hecho decisivo. Como se declara en el artículo 1 de los artículos sobre la responsabilidad del Estado aprobados el 9 de agosto de 2001 por la Comisión de Derecho Internacional<sup>83</sup>, “todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional”, mientras que en el artículo 2 se dispone que hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión es atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Ese principio ha sido ratificado por la jurisprudencia<sup>84</sup>.

78. Es el derecho internacional el que determina lo que constituye un hecho internacionalmente ilícito, con independencia de cualquier disposición del derecho interno<sup>85</sup>. En el artículo 12 se dispone que hay violación de una obligación internacional por un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de esa obligación<sup>86</sup>. La violación de carácter continuo se extiende durante todo el período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación

<sup>80</sup> Fallo de 10 de mayo de 2001, párr. 77, y fallo de 8 de julio de 2004, párrs. 312 y siguientes.

<sup>81</sup> Fallo de 8 de julio de 2004, párr. 312.

<sup>82</sup> Fallo de 8 de julio de 2004, párr. 318. Véase también el fallo de 10 de mayo de 2001, párr. 81.

<sup>83</sup> Señalados a los Gobiernos en la resolución 56/83 de la Asamblea General. Véanse también las resoluciones de la Asamblea General 59/35 y 62/61.

<sup>84</sup> Véanse, por ejemplo, la causa *Chorzów Factory*, Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A, No. 9, pág. 21 y la causa *Rainbow Warrior*, 82 International Law Reports, pág. 499.

<sup>85</sup> Artículo 3.

<sup>86</sup> Véase la causa *Gabčíkovo-Nagymaros Project*, ICJ Reports, 1997, págs. 7 a 38.

internacional de que se trate<sup>87</sup>, mientras que la Corte Permanente de Justicia Internacional puso de relieve que “es un principio del derecho internacional, e incluso una noción más importante del derecho, que cualquier violación de un compromiso implica la obligación de ofrecer reparación”<sup>88</sup>.

79. Todo Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a ponerle fin, si ese hecho continúa, y a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen<sup>89</sup>. Armenia está sujeta a esa obligación internacional.

80. Sin embargo, la cuestión del cumplimiento o la exigencia del cumplimiento de la obligación correspondiente establecida en el derecho internacional humanitario y en las normas internacionales de derechos humanos, es una cuestión jurídica y práctica independiente. Existen diversos mecanismos pertinentes. En la medida en que Armenia ha violado los tratados aplicables de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de esas convenciones o convenios (como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, etc.) son competentes para hacer el seguimiento de los Estados y exigir responsabilidades a los que, como Armenia, han infringido las disposiciones vinculantes de que se trate. Lo mismo puede decirse de las convenciones y convenios regionales pertinentes, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos, puesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano particularmente activo y que, en su condición de tribunal, tiene capacidad para emitir decisiones vinculantes.

81. El derecho internacional humanitario tiene sus propios procesos de aplicación. Las partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I se comprometen a respetar y a hacer respetar el instrumento en cuestión<sup>90</sup> y a difundir el conocimiento de sus principios<sup>91</sup>. También existen diversos métodos para exigir su cumplimiento, aunque se ha prohibido adoptar represalias<sup>92</sup>. Uno de los medios de aplicación es el concepto de Potencia protectora, designada para salvaguardar los intereses de los nacionales de una parte en un conflicto que estén bajo el control de la otra, ya sean prisioneros de guerra o civiles del territorio ocupado. Esa Potencia debe asegurar que se hayan cumplido las disposiciones pertinentes y que el sistema sirva como forma de garantía para la persona protegida y de canal de comunicación entre ella y el Estado del que sea nacional. Sin embargo, el inconveniente de ese sistema es que depende del consentimiento de las partes implicadas. No sólo debe estar dispuesta la Potencia protectora a actuar en condición de tal, sino que tanto el

---

<sup>87</sup> Véase el artículo 14. Véanse también, por ejemplo, la causa *Rainbow Warrior*, 82 International Law Reports, pág. 499; la causa *Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v Slovakia)*, ICJ Reports, 1997, págs. 7 a 54; la causa *Genocide Convention (Bosnia v Serbia)*, ICJ Reports, 2007, párr. 431; *Loizidou v Turkey*, Fondo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fallo de 18 de diciembre de 1996, párrs. 41 a 47, 63 y 64; y *Cyprus v Turkey*, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fallo de 10 de mayo de 2001, párrs. 136, 150, 158, 175, 189 y 269.

<sup>88</sup> Causa *Chorzów Factory*, Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A, No. 17, 1928, pág. 29; 4 AD, pág. 258. Véase también la causa *Corfu Channel*, ICJ Reports, págs. 4 a 23.

<sup>89</sup> Artículo 30. Véase también la causa *Rainbow Warrior*, 82 International Law Reports, págs. 499 a 573.

<sup>90</sup> Artículo 1 común.

<sup>91</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 144 del Cuarto Convenio de Ginebra y el artículo 83 del Protocolo adicional I.

<sup>92</sup> Véanse, por ejemplo, el artículo 20 y el párrafo 6 del artículo 51 del Protocolo adicional I.

Estado del que es nacional la persona protegida como el Estado que la tiene en su poder deben otorgar su consentimiento para que funcione el sistema<sup>93</sup>.

82. En el Protocolo adicional I también se prevé una Comisión Internacional de Encuesta<sup>94</sup>, facultada para proceder a una investigación sobre cualquier infracción grave<sup>95</sup> de los Convenios de Ginebra y de ese Protocolo o cualquier otra violación grave y facilitar, mediante sus buenos oficios, el “retorno a una actitud de respeto” de esos instrumentos. Ese organismo fue constituido en 1991 como Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta, después de que 20 Estados partes en el Protocolo acordaran aceptar su competencia<sup>96</sup>. Las propias partes en un conflicto pueden, por supuesto, poner en marcha una investigación ad hoc sobre las denuncias de violaciones del derecho humanitario<sup>97</sup>.

83. El Comité Internacional de la Cruz Roja desempeña una función importante de seguimiento y, de hecho, de aplicación<sup>98</sup>. Ese organismo tiene muy diversas funciones que cumplir, entre ellas obrar en pro de la aplicación de los Convenios de Ginebra e intervenir y actuar en los desastres naturales y los producidos por el hombre. Ha trabajado en un gran número de Estados, visitando a prisioneros de guerra o actuando con objeto de asegurar la aplicación del derecho humanitario<sup>99</sup>. Interviene en situaciones de conflicto armado tanto internacional como interno y también lo hace en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

84. En la causa relativa a las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia se refirió a la “situación particular” del CICR respecto de la ejecución de lo dispuesto en el Cuarto Convenio de Ginebra, que “debe ser ‘siempre reconocida y respetada’ por las partes según el artículo 142 de dicho Convenio”<sup>100</sup>. Además, la Comisión de Reclamaciones Eritrea-Etiopía ha indicado que al CICR se le han asignado responsabilidades importantes en diversos artículos del Tercer Convenio de Ginebra (que le concernía), como organización humanitaria que presta socorro y como organización que somete a un examen externo necesario y vital el trato dispensado a los prisioneros de guerra<sup>101</sup>.

85. Por supuesto, también puede ocurrir que las violaciones del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos

<sup>93</sup> Véase el artículo 9 del Cuarto Convenio de Ginebra.

<sup>94</sup> Véase el artículo 90 del Protocolo adicional I.

<sup>95</sup> Véanse los artículos 50, 51, 130 y 147 de los cuatro Convenios de 1949, respectivamente, y el artículo 85 del Protocolo adicional I. En 1992 se estableció una Comisión de Expertos para investigar las violaciones del derecho internacional humanitario en territorio de la ex Yugoslavia; véase la resolución 780 (1992) del Consejo de Seguridad. Véase también el informe de la Comisión de 27 de mayo de 1994, S/1994/674.

<sup>96</sup> Véase el manual del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, op. cit., pág. 415. En octubre de 2008, 70 de los 168 Estados partes en el Protocolo (aunque no Armenia ni Azerbaiyán) habían aceptado la competencia de la Comisión. Véase la declaración del Presidente de la Comisión de fecha 23 de octubre de 2008, [http://www.ihffc.org/en/documents/IHFFC\\_PresGA0810.pdf](http://www.ihffc.org/en/documents/IHFFC_PresGA0810.pdf).

<sup>97</sup> Artículos 52, 53, 132 y 149 de los cuatro Convenios de 1949, respectivamente.

<sup>98</sup> Véase, por ejemplo, G. Willemin y R. Heacock, *The International Committee of the Red Cross*, La Haya, 1984, y D. Forsythe, “The Red Cross as Transnational Movement”, 30 *International Organisation*, 1967, pág. 607.

<sup>99</sup> Véase, por ejemplo, el artículo 142 del Cuarto Convenio de Ginebra.

<sup>100</sup> A/ES-10/273, párr. 97.

<sup>101</sup> *Partial Award, Prisoners of War. Ethiopia's Claim 4 case*, 1º de julio de 2003, párrs. 58, 61 y 62.

constituyan crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, o incluso un delito de genocidio, en cuyo caso está prevista la jurisdicción universal con respecto a los presuntos infractores<sup>102</sup>. El enjuiciamiento de esas personas puede entonces estar a cargo de los tribunales internos de los Estados implicados o de terceros Estados. No hay actualmente ningún tribunal penal internacional ni ningún tribunal con jurisdicción para intervenir en relación con Armenia. En esos casos, la responsabilidad del Estado se puede exigir por conducto de los mecanismos interestatales pertinentes.

## 5. Conclusiones

86. Se pueden extraer las conclusiones siguientes:

1) El derecho aplicable en primera instancia es el derecho internacional humanitario, compuesto por el Reglamento de La Haya (que es parte del derecho internacional consuetudinario), junto con el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I, de 7 de junio de 1993, en los que Armenia es parte;

2) La participación de Armenia en el conflicto con Azerbaiyán dio a ese conflicto un carácter internacional;

3) La participación de Armenia en la toma y retención de la región de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán y los distritos aledaños fue de tal naturaleza que hizo entrar en juego las disposiciones del derecho internacional humanitario;

4) Los hechos demuestran que Armenia está ocupando esas zonas en el sentido en que se entiende la ocupación en el derecho internacional humanitario;

5) El derecho internacional excluye la adquisición de soberanía sobre un territorio mediante la fuerza, de modo que la ocupación de territorios de Azerbaiyán por Armenia no puede asegurarle ningún tipo de derecho de propiedad a ese último Estado;

6) En su condición de Potencia ocupante, Armenia está sujeta a diversas obligaciones con arreglo al derecho internacional;

7) El núcleo de esas obligaciones está enunciado en el artículo 43 del Reglamento de La Haya y se centra principalmente en restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país;

8) La presunción a favor del mantenimiento del ordenamiento jurídico en vigor es particularmente pertinente y está apoyada por las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra;

9) La propiedad privada y la propiedad pública están particularmente protegidas. Los bienes de propiedad privada no pueden ser confiscados, salvo cuando sean requisados para propósitos militares necesarios, pero incluso en ese caso se habrán de tener en cuenta las necesidades de la población civil;

---

<sup>102</sup> Véanse, por ejemplo, A. Cassese, *The International Criminal Court*, 2ª ed., Oxford, 2008; W. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 3ª ed., Cambridge, 2007; R. Cryer, H. Friman, D. Robinson y E. Wilmschurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge, 2007; I. Bantekas y S. Nash, *International Criminal Law*, 2ª ed., Londres, 2003; y G. Werle, *Principles of International Criminal Law*, La Haya, 2005.

10) El Estado ocupante no es sino el administrador de los bienes de propiedad pública y deberá salvaguardar el capital de esos bienes y administrarlos conforme a las reglas del usufructo;

11) Está prohibida la destrucción de bienes de propiedad privada y pública, excepto en los casos en que tal destrucción sea absolutamente necesaria a causa de las operaciones militares;

12) Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus creencias y prácticas religiosas, sus usos y costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o intimidación;

13) En su condición de Potencia ocupante, Armenia tiene una obligación especial con respecto a los desaparecidos azerbaiyanos, que al 1º de enero de 2008 son 4.210, según cálculos aceptados;

14) En virtud del derecho internacional humanitario, Armenia tiene la obligación de no establecer ni facilitar el establecimiento de asentamientos de armenios en los territorios ocupados;

15) Armenia no puede eludir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario apoyando a una administración local subordinada;

16) Además de las normas tradicionales del derecho humanitario, Armenia también está obligada en su administración de los territorios ocupados por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte;

17) Esos tratados incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

18) En su ocupación de Nagorno-Karabaj y los distritos aledaños, Armenia también está obligada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

19) Armenia es responsable como Estado de sus violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, conforme se ha analizado más arriba, y está obligada a poner fin a sus violaciones y a repararlas;

20) Se puede hacer un seguimiento de esas obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos y se puede exigir su cumplimiento por conducto de los mecanismos en vigor pertinentes para Armenia, como el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto con los procesos del CICR;

21) Por lo que se refiere a los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, puede haber responsabilidad individual, que se puede exigir por conducto de tribunales internos de diversos Estados implicados o terceros Estados, mientras que la responsabilidad del Estado puede exigirse cuando sea posible por conducto de los mecanismos interestatales pertinentes.